



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: EJECUTIVO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-015-2016-00159-01 (E2-22-093)
Demandante: LUIS CARLOS ORTEGA VELÁSQUEZ
Demandada: COLPENSIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: AUTO INTERLOCUTORIO No.047 DEL 01 DE AGOSTO DE 2022
Asunto: MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO - CUENTAS DE COLPENSIONES

En Medellín, a al primer (01) día del mes de agosto de dos mil veintidós (2022), **la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, RAFAEL TORDECILLA PAYARES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, resuelve el **Recurso de Apelación** impetrado por ROCÍO DEL SOCORRO CANO RÍOS en calidad de curadora de LUIS CARLOS ORTEGA VELÁSQUEZ dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL que promueve en contra de la COLPENSIONES, conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-015-2016-00159-01 (E2-22-093).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

La señora ROCÍO DEL SOCORRO CANO RÍOS en calidad de curadora de LUIS CARLOS ORTEGA VELÁSQUEZ, actuando por intermedio de apoderada judicial, promueve demanda ejecutiva laboral a continuación del proceso ordinario laboral, distinguido bajo radicado único nacional N° 05001-31-05-015-2014-00649-00 en contra de COLPENSIONES, y en virtud de la cual se libró mandamiento de pago por el saldo pendiente de intereses de mora equivalentes a la suma de \$12.423.716, las costas del proceso y los intereses corrientes respecto de los mismos. Una vez surtido el trámite correspondiente, en audiencia del 02 de mayo de 2018 (carp.01, doc. 01, pág. 169 a 174) se declaró parcialmente probada la excepción de pago y se ordenó continuar la ejecución por la suma de \$12.423.716,49;

mediante memorial del 25 de febrero de 2022 (carp.01, doc. 08) la parte actora solicitó el decreto del embargo de los dineros que la entidad ejecutada posea en las cuentas N° 6528350958, 65283209592 y 65283206810, todas ellas cuentas de ahorro de Bancolombia.

1.1. Trámite de Primera Instancia

Por auto del 28 de febrero de 2022 (carp.01, doc. 09), se denegó el decreto de las medidas cautelares deprecadas, fundamentando tal decisión en *“varios informes rendidos por Colpensiones, tanto a este Despacho como a las entidades crediticias donde posee las cuentas bancarias, donde reitera su inembargabilidad”*, para concluir que las cuentas de la entidad ejecutada son inembargables, existiendo providencias de dos Salas del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia de las Magistradas MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELASQUEZ, que sostienen la tesis de inembargabilidad de los recursos de los Fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida. El 02 de marzo de 2022 (carp.01, doc. 10) la litigiosa por activa interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, mediante el cual insiste que se decreten las medidas cautelares solicitadas, aduciendo que si bien por regla general los recursos destinados al sistema de seguridad social integral son inembargables, tal protección legal de inembargabilidad no es absoluta, existiendo excepción para la protección del pago de sentencias que reconocen derechos pensionales o sus derivados como el caso por ella puesto a consideración.

1.2. Trámite de Segunda Instancia

El 28 de marzo de 2022 (carp.02, doc. 02), se admitió el recurso de alzada, y el 04 de abril del mismo año (carp.02, doc. 03), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, presentaron alegatos de conclusión por escrito.

Dentro del término oportuno COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión en los cuales manifiesta que acoge la tesis del juzgado de instancia, en tanto que se ha probado reiteradamente que sus cuentas son inembargables por tener recursos públicos destinados al pago de prestaciones de la Ley 100 de 1993, además de que en el caso concreto no se están afectando derechos fundamentales que deban ser protegidos con el decreto de la medida cautelar, toda vez que los derechos reclamados provienen de una sentencia judicial con contenido netamente patrimonial.

Por su parte, la activa dejó fenecer el término para alegar, sin hacer uso de dicha oportunidad procesal.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surcado el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por pasiva, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si es procedente el decreto de la medida cautelar de embargo respecto de las cuentas de ahorro que la parte litigiosa por activa denuncia como cuentas que la demandada Colpensiones posee en la entidad financiera Bancolombia.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala revocará la decisión apelada, en tanto que si bien los recursos del sistema de seguridad social ciertamente son inembargables, el objeto de la ejecución cumple con los presupuestos legales y jurisprudenciales para decretar la medida cautelar de forma excepcional, según y conforme con los planteamientos que pasan a exponerse.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

Ab initio, ha de resaltarse que el auto del 28 de febrero de 2022 es recurrible en apelación conforme los artículos 65 del C.P.T. y de la S.S. y 321 del CGP, puesto que con dicho pronunciamiento se decidió la petición de la medida cautelar impetrada supradicha.

En cuanto a la medida cautelar de embargo de los dineros de Colpensiones, es preciso relieves que el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 dispuso que son inembargables "(...) 2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas (...)", al tiempo que el artículo 594 del Código General del Proceso dispuso que "Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar: 1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en

el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social. (...)"; con todo ello, atendiendo a los predicamentos de la Corte Constitucional, este mandato legal no es absoluto y debe excepcionarse cuando quiera que se vean comprometidos derechos fundamentales de los pensionados, tales como la vida digna, la seguridad social y el acceso a la administración de justicia, cuando lo que se pretende es el pago de acreencias de carácter laboral o pensional.

"El principio de inembargabilidad no puede llevarse al extremo de desconocer las obligaciones contraídas por el Estado en materia laboral, según ya lo destacó la Corte en sus fallos C-546 del 1º de octubre de 1992, C-337 del 19 de agosto de 1993 y C-103 del 10 de marzo de 1994, entre otros". (sentencia C263 de 1994 Corte Constitucional)

Igualmente, en la sentencia C-1154 de 2008, refiriéndose a los recursos públicos incorporados al Presupuesto General de la Nación, recogió tres excepciones a la regla general de inembargabilidad, las cuales es procedente traer a colación dada la característica común de inembargabilidad que comparten los recursos del Presupuesto General de la Nación y los recursos del Sistema de Seguridad Social, conforme lo dispone el artículo 594 del CGP, a saber:

... el Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.

4.3.1.- La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al respecto, en la Sentencia C-546 de 1992, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que "en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo".

(...)

La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Así fue declarado desde la Sentencia C-354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación), "bajo el entendido de que

los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos"

(...)

Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. En la Sentencia C-103 de 1994 la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la ejecución contra entidades de derecho público y la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en torno de la excepción a la regla general de inembargabilidad delineó:

*"Debe advertirse que tales reflexiones lucen contradictorias pues, como claramente lo indicó la Colegiatura, **el derecho reclamado por vía de ejecución forzada, también es pensional, y por ende, los pagos que de él se deriven**, deben gozar de igual grado de importancia y prevalencia que para el resto de jubilados a quienes las accionadas buscan blindar.*

Aunado a lo dicho, debe entenderse que la inhibición en el decreto de las cautelas por la loable causa de preservar los dineros destinados al pago de pensiones al grueso de jubilados de nuestro país, a la postre constituye un patrocinio a la indolencia y el desorden administrativo de la entidad, quien por la tesis de inembargabilidad no se ve constreñida a cumplir los mandatos Constitucionales y legales que le han sido impuestos". (STL 10627-2014 reiterada por SLT 4212-2015, STL 18606-2016 y STL 14429-2019)-Negrillas intencionales-

Ahora bien, esgrime la alzadista, que la ejecución del saldo de intereses de mora por la cual se libró mandamiento de pago y se ordenó seguir adelante la ejecución en el presente proceso, constituye una pretensión derivada de un derecho pensional y por tanto, a su criterio, debe aplicarse la excepción a la regla general de inembargabilidad. Al respecto, ha de puntualizar la Sala que los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, constituyen una prestación reconocida en virtud de la mora en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales, cuya finalidad es resarcitoria y no condenatoria, ya que con ellos lo que se pretende es reparar los perjuicios causados a quien teniendo derecho a la pensión no recibe oportunamente su valor, esto es, que no se deriva del pago directo de la pensión periódica reconocida (SL 10728-2016, SL1681 de 2020, SL2117-2022), pero evidentemente se deriva del incumplimiento injustificado del pago de un derecho pensional, del cual depende su efectividad, pues sin el reconocimiento del derecho a la pensión no se podría hablar del

derecho a percibir los intereses moratorios; de suerte tal, que al ser los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, consiguientes a la prestación pensional, deberán correr con la misma suerte de esta y, por tanto, para su pago efectivo habrá de aplicarse la excepción a la inembargabilidad de los recursos de COLPENSIONES.

Al respecto, el H. Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, en sentencia de tutela del 10 de junio de 2021, radicado 11001-03-15-000-2020-04268-01 (AC), en caso similar dispuso:

En el presente asunto, la accionante reprocha las providencias de 13 de septiembre de 2019 y 2 de julio de 2020 mediante las cuales el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, le negó la medida cautelar de embargo solicitada con el fin de garantizar el pago de los intereses moratorios derivados de la sentencia de 10 de marzo de 2011 a través de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación, porque, en su entender, con dichas providencias se desconoció la jurisprudencia constitucional que ha determinado la posibilidad de garantizar el pago efectivo de una condena derivada de una sentencia judicial a través de una medida cautelar de embargo.

(...)

la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca obedeció, únicamente, al análisis de los artículos 593 y 594 del Código General del Proceso, a partir de lo cual precisó la imposibilidad de decretar medidas de embargo sobre recursos provenientes del presupuesto general de la Nación, y concluyó que el pago de las sentencias está garantizado a través de los rubros destinados en cada vigencia presupuestal.

No obstante, desconoció que dicha regla general ha sido objeto de reiterados pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional en las sentencias referidas en el acápite precedente, en las que se han establecido ciertas excepciones, precisamente con miras a acompasar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con la garantía y vigencia de los derechos fundamentales.

Así las cosas, es claro para la Sala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en desconocimiento del precedente constitucional relacionado con las excepciones al principio de inembargabilidad de recursos públicos, lo que, como bien lo señaló la Sección Cuarta de esta corporación, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la accionante, en tanto se insiste, no realizó consideración alguna sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.

En línea de lo anterior, es menester señalar que a más de que los intereses moratorios son una prestación consiguiente al reconocimiento del derecho pensional, del que obtiene su fundabilidad, deben seguir su misma suerte con la aplicación de la excepción de inembargabilidad, y por ende, con la imposición de las medidas cautelares decretadas en el trámite del proceso ejecutivo. Para dirimir el presente caso, debe tenerse en cuenta la

excepción segunda aupada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, pues se trata de *“el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias”*; debiéndose por tanto asegurar la efectividad de derechos fundamentales y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Consecuente con lo anterior, habrá de inaplicarse en el presente caso, la regla general de inembargabilidad y, por tanto, sin más puntos de apelación por resolver, surge imperativo el deber para la Sala de revocar la decisión confutada de fecha 28 de febrero de 2022, para en su lugar, decretar las medidas cautelares deprecadas, consistentes en el embargo y secuestro de los dineros que posee COLPENSIONES en la primera cuenta de ahorro relacionada con la petición, esto es, N° 65283509581 de Bancolombia, debiéndose señalar como cuantía máxima de la medida la suma de Doce Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Setecientos Dieciséis Pesos con Cuarenta y Nueve Centavos (\$ 12.423.716,49), para lo cual se expedirá el respectivo oficio a la entidad financiera, dejando salvo, en esa misma línea, la posibilidad a la a-quo de decretar la misma medida cautelar de las otras cuentas de ahorro, de ser necesario.

4. COSTAS

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR íntegramente el proveído de fecha 28 de febrero de 2022, proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL promovido por LUIS CARLOS ORTEGA VELASQUEZ, quien actúa a través de su curadora, la señora ROCÍO DEL SOCORRO CANO RÍOS en contra de COLPENSIONES, para en su lugar:

***“PRIMERO:** Decretar el embargo y secuestro de los dineros que posee COLPENSIONES en la cuenta de ahorro N° 65283509581 de Bancolombia, en cuantía máxima de Doce Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Setecientos Dieciséis Pesos con Cuarenta y Nueve Centavos (\$12.423.716,49), según y conforme al parte considerativa de este proveído”*

SEGUNDO: Se ordena a la cognoscente de instancia expedir el respectivo oficio a la mencionada entidad financiera, dejando salvo, en esa misma línea, la posibilidad a la a-quo de decretar la misma medida cautelar de las otras cuentas de ahorro, de ser necesario.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 41 del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES
Magistrado



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas, corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los
ESTADOS No.134, fijados en la secretaría del
Tribunal, hoy **02 de agosto de 2022** a las 08:00am,
los cuales pueden ser consultados en
["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario